

Una perspectiva de género

La privatización: ¿qué significa para las mujeres?

Jane Stinson

Las mujeres de todo el mundo tienen mucho que perder con la privatización de los servicios públicos. Los mejores trabajos para las mujeres en el sector público están siendo reemplazados por empleos inseguros y con salarios más bajos, con una carga laboral más pesada y menos derechos sindicales. Servicios públicos tales como el cuidado de los hijos, la educación y la atención sanitaria, concebidos originalmente como formas de apoyo a la participación femenina, están siendo desmantelados ante el avance de principios mercantiles.

La privatización también incrementa las responsabilidades de las mujeres en la familia, al intensificar o aumentar el tiempo dedicado al trabajo doméstico y las relaciones hogareñas. La privatización de la salud y de los servicios sociales es particularmente problemática para las mujeres, dado que la naturaleza del trabajo en estos sectores es similar al trabajo de reproducción doméstica no remunerado, reservado para las mujeres en el ámbito del hogar.

A pesar de sus impactos negativos sobre las mujeres muchos gobiernos alrededor del mundo apoyan la privatización de instituciones públicas tales como hospitales, escuelas y centros recreativos, así como de infraestructuras tales como carreteras y sistemas de distribución de agua. Esta tendencia global se fundamenta en supuestos de mayor eficiencia a ser obtenida a través de la expansión de instituciones de mercado. La privatización está siendo promovida por poderosas corporaciones globales, interesadas en ampliar sus oportunidades de mercado y sus ganancias. A su vez, organizaciones supranacionales del tipo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) están promoviendo y hasta forzando la privatización y la desregulación del sector público, particularmente a través de negociaciones en el marco del Acuerdo

General de Comercio en Servicios (AGCS, o GATS por su sigla en inglés).

A diario escuchamos hablar mucho sobre el poder del capital global, pero muy poco sobre el poder de la solidaridad global de hombres y mujeres que se oponen a la privatización y que defienden un mayor control público y social de nuestra economía y nuestra riqueza compartida. Aun así, los movimientos populares contra la privatización son fuertes y siguen acumulando fuerza con la creación de nuevos vínculos a partir de la transferencia mutua de información y el diseño en conjunto de nuevas estrategias de lucha. Afortunadamente, al mismo tiempo que las corporaciones globales aumentan su poder también se fortalecen las redes de solidaridad global.

Mi sindicato, la Unión Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, *Canadian Union of Public Employees*), es la mayor organización sindical de Canadá. Más de la mitad de sus 500.000 miembros son mujeres. CUPE mantiene frecuentes contactos con otras organizaciones que se oponen a la privatización en otros países. Por ejemplo, el testimonio vivo que recibimos en marzo de 2003 por parte de un miembro del Parlamento de Colombia inspiró a los delegados participantes en el congreso nacional de nuestro sindicato contra la privatiza-

ción en Canadá. Los trabajadores municipales de Cali habían logrado detener la privatización de empresas públicas ocupando las oficinas del gobierno local. La victoria fue posible debido a que durante años ellos habían ofrecido solidariamente sus servicios a los barrios pobres de la ciudad para compensar la falta de atención desde el gobierno. Tales prácticas habían establecido los cimientos del apoyo comunitario que sería en el futuro necesario para el éxito de la ocupación.

En el área de los servicios de salud, CUPE también monitorea con mucha atención lo que está pasando con el financiamiento privado de los hospitales en el Reino Unido. Nuestro sindicato utiliza las historias horripilantes que llegan desde el Reino Unido como argumentos contra la financiación, propiedad y gestión privada de hospitales y otras instituciones públicas en Canadá. CUPE también observa atentamente la lucha contra la privatización de sistemas municipales de provisión de agua, como parte de una lucha global protagonizada por sindicatos, organizaciones ciudadanas, activistas ambientales, grupos de mujeres y organizaciones defensoras de la justicia social.

Del Estado de bienestar keynesiano al Estado neoliberal

La privatización es un concepto muy amplio que cubre muchas prácticas concretas de desmantelamiento de los servicios públicos y la apropiación de responsabilidades mucho más amplias en el financiamiento y la gestión de servicios por parte del sector privado. La financiación privada puede asumir la forma de individuos que pagan más por acceder a servicios públicos, por ejemplo a través de tasas de servicio o tarifas, en lugar de la cobertura de costos a través del cobro de impuestos. También incluye el fomentar que corporaciones privadas inviertan en la construcción o la renovación de infraestructuras de instituciones públicas tales como hospitales o escuelas. A los gobiernos les agradan tales 'asociaciones público-privadas' porque reducen la deuda pública, pese a que derivan en costos más altos a largo plazo y la frecuente pérdida de propiedad y control público. Probablemente la forma más común de gestión privatizada es la transferencia o subcontratación de un servicio público (por ejemplo la limpieza de una escuela o un hospital) a una empresa particular. Una perspectiva de género revela otra forma de privatización: la transferencia de trabajo remunerado y de servicio público, generalmente provisto por las

mujeres, a la esfera de trabajo femenino no remunerado en el hogar.

La privatización cuestiona un elemento fundamental del Estado de bienestar de inspiración keynesiana: la noción de responsabilidad colectiva, pública o social. Tal es el argumento de Brenda Cossman y Judy Fuge (2002) en su libro sobre las mujeres y la privatización. En reemplazo de la responsabilidad colectiva aparece un sistema mercantil basado en la flexibilidad laboral y la capacidad individual de satisfacción de necesidades. La transición al Estado neoliberal afecta lo que pensamos sobre 'lo público' y 'lo privado', principalmente en torno a la relación establecida entre los hogares privados y el Estado. Al tiempo que el Estado transfiere sus responsabilidades como proveedor y gestor de los servicios públicos a los individuos, los costos laborales pasan a ser más bajos gracias al trabajo doméstico no remunerado, los recortes en la fuerza laboral y la subcontratación.

El período comprendido entre el fin de la segunda guerra mundial y principios de la década de los setenta se caracterizó por la expansión colosal de servicios públicos tales como la atención sanitaria, los servicios sociales y el cuidado de la infancia. Muchas mujeres se integraron al mercado laboral para la provisión de tales servicios, no sólo porque el fuerte crecimiento de la economía requería la ampliación de la fuerza de trabajo, sino también porque los nuevos empleos en el área de servicios eran similares al trabajo desempeñado por las mujeres en el hogar. El Estado de bienestar keynesiano asumió la responsabilidad por el trabajo hasta entonces no remunerado y fundamentalmente femenino en el ámbito familiar, al tiempo que expandía la cobertura de servicios. Gracias a la acción colectiva protagonizada por los sindicatos, el sector público se transformó en una fuente de buenos empleos para las mujeres de Canadá y otras sociedades industrializadas.

En Canadá, como en muchos otros países, los empleos en el sector público, incluyendo la salud, la educación y algunos servicios sociales, son la principal fuente de sindicalización femenina. Las estrategias de organización sindical y feminista han resultado en aumentos significativos de los salarios de las mujeres en el sector público, por encima de la media de ingreso femenino del sector privado. También se han ampliado beneficios como los planes de pensiones, los seguros por enfermedad y el salario vacacional. Como resultado, las mujeres sindicalizadas de Canadá ganan, en promedio, 5.4 dólares canadienses (aproximadamente 4,5 dólares estadounidenses)



más que las mujeres no sindicalizadas. Asimismo, dos tercios de las mujeres en el sector público tienen una jubilación garantizada, en comparación a menos de un tercio de las mujeres que no están integradas a ningún sindicato.

La subcontratación y la reversión de los derechos de las mujeres

La privatización debilita las ventajas de la integración a los sindicatos al revertir los beneficios acumulados por la acción colectiva durante los pasados 50 años. En Canadá este proceso es evidente con más claridad en la subcontratación de los servicios de salud en la provincia de British Columbia, en la costa occidental del país.

El gobierno provincial pavimentó el camino para la subcontratación de servicios de apoyo en hospitales y otros centros de atención de salud, al aprobar el recorte de acuerdos fundamentales de protección de la seguridad laboral que formaban parte del convenio colectivo del Sindicato de Trabajadores Hospitalarios (HEU, *Hospital Employees' Union*, una organización afiliada a CUPE). La transición hacia la gestión privada significó que miles de trabajadores, fundamentalmente mujeres, perdieran su trabajo. La responsabilidad por los servicios prestados fue transferida por el gobierno de la provincia a corporaciones privadas multinacionales. El salario por hora de los limpiadores de hospital bajó a la mitad (de 18 a 9 dólares canadienses), dejando de ser los trabajadores del país con salario más alto para pasar a ser los de salario más bajo, al comparar sus ingresos en base a convenios sindicales para la misma categoría laboral. También se redujeron las horas a trabajar y aumentó la inseguridad del empleo. Se eliminó la cobertura de planes de pensión y los trabajadores debieron asumir un costo más alto para acceder a servicios de salud. La mayoría de los trabajadores afectados eran mujeres inmigrantes (Cohen, 2003).

El sindicato que representa a los trabajadores hospitalarios ha contraatacado, lanzando un ofensiva exitosa de defensa de los empleados que habían pasado a trabajar para las empresas privadas. HEU se propone elevar salarios y beneficios y fortalecer los derechos laborales a través de la negociación colectiva. Pero una estrategia política más amplia también es necesaria. El sindicato participó activamente, junto al movimiento sindical y otras organizaciones populares de British Columbia, en una campaña para movilizar votantes con el objetivo de derrotar al gobierno neoliberal de la provincia en las elec-

ciones de 2005. El examen público de la experiencia de privatización, incluyendo las implicancias para la seguridad y la salud públicas, es otra importante arma en el arsenal de relaciones públicas del sindicato. La capacitación inadecuada del personal y las pesadas cargas de trabajo resultantes de la privatización contribuyen a aumentar la preocupación sobre el posible contagio de infecciones y enfermedades como la epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por su sigla en inglés) que afectó la ciudad de Toronto en 2003.

Nuevas formas de solidaridad internacional

Ubicado casi en las antípodas de Canadá, nuestro sindicato hermano, la Unión Sudafricana de Trabajadores Municipales (SAMWU, *South African Municipal Workers Union*), también está resistiendo la privatización. Con apoyo de Fondo Mundial por la Justicia Global de CUPE, ambos sindicatos y un equipo de académicos han desarrollado un proyecto de investigación-acción denominado Proyecto de Servicios Municipales (MSP, *Municipal Services Project*), orientado al análisis de las consecuencias de la privatización a escala local. El trabajo del MSP, al documentar las consecuencias de la privatización del agua y la electricidad en Sudáfrica, ha sido de utilidad en la estrategia de información seguida en Canadá y en otros países.

Otro componente del MSP investiga los impactos de género de la privatización de los servicios municipales de recolección de basura (Samson, 2003). Este módulo concluyó con la publicación de un libro de difusión popular titulado *La basura sobre las mujeres*. El estudio argumenta que la privatización de los servicios de recolección de basura se aprovechó y con frecuencia empeoró el estatus social más bajo de las mujeres. La privatización afectó a todos los trabajadores de forma negativa; no obstante, debido a la división del trabajo en base al género en el lugar de trabajo, en la comunidad y en la familia, los hombres y las mujeres fueron afectados de forma distinta. En la mayoría de los casos, las mujeres negras fueron las más perjudicadas.

La recolección de la basura en Sudáfrica se organiza en base a divisiones de género, con los hombres usando los camiones para recoger la basura y las mujeres a cargo del barrido y la limpieza manual de las calles. La privatización cambió la modalidad de trabajo. Las mujeres que limpiaban las calles dejaron de estar asignadas a rutas preestablecidas y pasaron a trabajar en cualquier lugar

donde fueran requeridas, con más frecuencia trabajando en solitario. Tal cambio aumentó su exposición al riesgo de asalto y violación. Parte del trabajo antes desempeñado por las mujeres se transfirió a voluntarios de la comunidad, también mujeres, generalmente como trabajo no remunerado. Los hombres no fueron afectados en su estilo de trabajo, pero algunos de sus empleos fueron subcontratados.

Las mujeres también fueron perjudicadas por el menor acceso a facilidades de vestimenta y aseo personal, baños y equipamiento adecuado. Sus necesidades se consideran menos importantes que las de sus colegas hombres. Los empleos de limpieza y barrido de calles fueron los más afectados por los despidos, al considerarse que la recolección de basura (un trabajo masculino) tenía prioridad. Asimismo, las mujeres pasaron a tener salarios más bajos y menor protección contra tratamientos arbitrarios, al no estar cubiertas por los convenios de trabajo, que sólo cubrieron a los hombres ocupados en los camiones de recolección de basura.

La misma división del trabajo en base al género no existe en los servicios de recolección de basura de Canadá. Sin embargo, los impactos observados en Sudáfrica dieron lugar a cuestionamientos de fondo sobre las implicancias de género de la privatización y la subcontratación de servicios públicos en términos de salarios y trabajo no remunerado entre las mujeres de Canadá.

La privatización y el trabajo doméstico de las mujeres

Necesitamos conocer más acerca de los impactos de la privatización sobre la cantidad y la complejidad del trabajo no remunerado de las mujeres a escala familiar. Las estadísticas oficiales de Canadá indican que las mujeres casadas, con edades entre 25 y 44 años, con empleos a tiempo completo y niños a su cargo en el hogar, son las que sufren el *stress* más severo entre todos los habitantes del país. Esta situación se debe en parte a que las mujeres, además del trabajo fuera del hogar, trabajan más que los hombres en la casa y sin recibir pago por ello, principalmente mientras los hijos son pequeños. Las mujeres entre 25 y 44 años proveen todo tipo de atención y servicio, incluyendo el cuidado de los niños y de adultos mayores, así como transporte, trabajo doméstico, cocina y varios tipos de ayuda no remunerada a otros adultos por fuera de sus propios hogares (Zukewich, 2003).

El valor de este trabajo doméstico no remunerado es impresionante. El centro nacional de estadísticas oficiales (Statistics Canada, 2001) ya habían estimado en 1998 que su valor sería equivalente a 50.900 millones de dólares canadienses si servicios comparables fueran adquiridos a precios de mercado. Dicha cantidad sería superior al ingreso laboral generado por las industrias de la salud y de la asistencia social (42.100 millones), servicios educativos (40.100 millones), o los sectores de las finanzas, los seguros y el sector inmobiliario (43.400 millones).

Si incluso una pequeña porción de estas horas de cuidados informales se transfiriera del hogar al mercado laboral asalariado —por ejemplo las 156 millones de horas que las mujeres dedican anualmente a proveer atención médica a quienes son expulsados prematuramente de los hospitales— sería equivalente a aproximadamente 77.000 empleos de tiempo completo. Es fácil imaginar el aporte posible a la mejora del estatus económico de las mujeres y la ampliación de sus disponibilidades de tiempo personal si todo este trabajo informal se transfiriera al mercado de trabajo asalariado.

La construcción de un movimiento global contra la privatización

La privatización amenaza la igualdad económica de las mujeres al atacar las mejores condiciones laborales y salarios más altos que se habían conquistado en el sector público a través del accionar de los sindicatos. También amenaza las posibilidades de alcanzar una mayor equidad de género al recortar los programas públicos de bienestar social. La privatización está eliminando y horadando servicios públicos que las mujeres, en particular, utilizan como apoyo para la reproducción social: cuidado de los niños, atención de la salud, y educación.

Para prevenir estos impactos es necesario construir una fuerte base de resistencia a las corporaciones y los gobiernos interesados en privatizar los servicios públicos. La resistencia debe estar cimentada en las comunidades y aún más allá, con nexos alrededor del mundo con otras organizaciones comprometidas en luchas similares. El éxito de la resistencia a la privatización tendrá sus raíces en las luchas comunitarias, pero las mismas se beneficiarán también de los vínculos provinciales, nacionales e internacionales.

Dada la participación directa de los trabajadores como testigos de los cambios producidos por la privatización, nuestros sindicatos pueden jugar un rol importante



en la exposición de las consecuencias negativas. Los sindicatos deberían resaltar tanto los impactos cualitativos como los cuantitativos en la provisión de servicios públicos. Identificar las implicancias prácticas de las políticas privatizadoras, para los trabajadores y para el público en general, es importante para el fomento de una mayor participación de las comunidades en la resistencia a la privatización y en el mejoramiento de los servicios públicos.

También es necesario profundizar en el análisis de los cambios causados por la privatización desde una perspectiva de género, resaltando las consecuencias desproporcionadamente negativas sobre las mujeres. La producción de conocimiento más preciso y matizado sobre los efectos de la privatización puede constituir la base a partir de la cual se pueda llegar a otras mujeres y grupos de mujeres que quieren un cambio. Es crucial presionar a quienes deciden las políticas públicas para que evalúen la privatización en términos de otros objetivos sociales, tales como la igualdad y la equidad, con énfasis en sus impactos sobre los grupos sociales más desprotegidos. Y así como es importante mostrar quiénes pagan el precio de la privatización, también lo es mostrar quiénes son los beneficiarios —por ejemplo, las corporaciones que aumentan sus ganancias con la privatización de los servicios públicos.

No obstante, se requiere mucho cuidado para evitar darles una excusa a los gobiernos y no centrar el análisis sólo en el rol de las corporaciones globales. Las corporaciones son culpables de muchas cosas, pero es fundamental mantener el foco y la presión sobre los gobiernos, locales, provinciales o nacionales. Las autoridades electas, no las corporaciones, son quienes deciden sobre la privatización de los servicios públicos. Las corporaciones hacen presión y utilizan los tratados internacionales de

comercio o inversión, pero son nuestros gobiernos nacionales los que están abriendo las puertas de la privatización y estableciendo las reglas para el desmantelamiento progresivo del sector público a escala global. Es prioritario definir estrategias que posibiliten una mayor capacidad de incidencia sobre las decisiones gubernamentales. Es necesario el desarrollo de coaliciones amplias y de base local que presionen a los gobiernos a todos los niveles, requiriendo más información, debates abiertos y transparencia en la toma de decisiones que conciernen al futuro de los servicios públicos.

Es esencial evitar que la reestructura del Estado y la privatización de los servicios públicos salgan adelante sobre las espaldas de las mujeres. Las mujeres no deberían ser las que asumen los mayores costos del declive de las condiciones laborales —menor índice de sindicalización, salarios más bajos, menos beneficios sociales, derechos laborales más débiles, empleo más precario, horas de trabajo menos previsible. Asimismo, las mujeres no deberían ser forzadas a asumir una mayor carga de trabajo en el hogar y más responsabilidades en el cuidado de la familia debido a la erosión de los servicios públicos. Si realmente se quiere apoyar la causa de la igualdad y la equidad femenina, los hombres deben asumir más responsabilidades en el hogar. Ello permitiría que las mujeres ampliaran su participación en la acción política y en la organización de base comunitaria en defensa de más y mejores servicios públicos. Los sindicatos tienen un importante papel en esta historia, junto a las organizaciones de mujeres y otras organizaciones que promueven la justicia social. Las coaliciones de base comunitaria que se oponen a la privatización también deberían presionar por el mejoramiento y la ampliación de los servicios sociales como herramientas de construcción de una mayor equidad económica y social.

Referencias

- Cohen, M. G.** (2003) 'Destroying Pay Equity: The effects of privatizing health care in British Columbia'. Vancouver: Hospital Employees' Union y Simon Fraser University.
- Cossmán, B. y J. Fudge (eds.)** (2002) *Privatisation and the Law, and the Challenge to Feminism*. Toronto: University of Toronto Press.
- Samson, M.** (2003) *Dumping on Women: Gender and Privatisation of Waste Management*. Municipal Services Project (MSP) y South African Municipal Workers' Union (SAMWU).
- Statistics Canada** (2001) 'Stress and Well-being'. *Health Reports* 12(3).
- Zukewich, N.** (2003) 'Unpaid Informal Caregiving', *Canadian Social Trends*.